REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARENTA Y NUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN
DE CONOCIMIENTO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

ASUNTO POR RESOLVER

La demanda de tutela promovida por **John Alexander Rodríguez Cristancho**, contra la **Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación**, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, petición e igualdad.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Y TRÁMITE

1. El 26 de marzo se asignó por reparto la acción de tutela instaurada por **John Alexander Rodríguez Cristancho**. A modo de sustento fáctico indicó que, en desarrollo del Concurso de Méritos FGN 2024, la accionada dispuso incluir el IDplanta 26866 – Nivel Central Profesional Especializado II en la oferta pública de empleos para proveer¹; que en ese cargo lo desempeña, en provisionalidad, desde el 29 de julio de 2021 al interior de la Dirección de Asuntos Jurídicos – Coordinación de Defensa Jurídica.

El 3 de marzo, una vez conoció la decisión, solicitó por escrito a la Dirección Ejecutiva reconsiderar la inclusión del cargo en el acto administrativo, pues actualmente detenta la condición de padre cabeza de familia, siendo el único sustento económico, social y afectivo de su hijo S. M. R. V., de 14 años de edad y cuyo cuidado depende exclusivamente de él; esa condición, aduce, fue acreditada ante la accionada por medio del escrito petitorio.

Sin embargo, el 20 de marzo la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación nuevamente dispuso incluir y excluir, mediante Resolución N° 02094, distintos cargos de la oferta pública, permaneciendo el suyo, sin que, por tanto, a la fecha de interposición de la tutela tal determinación se haya corregido o emitido algún pronunciamiento en relación con la solicitud, a pesar de que en las resoluciones *“uno de los criterios de selección [para] excluir algunos cargos a proveer es que se tendrá en cuenta a los funcionarios que en la actualidad cuentan con esa condición, para que no hagan parte del concurso”*.

Sostiene, por último, que para la exclusión de los IDplanta la Resolución N° 02094 alude también al criterio de antigüedad, lo cual, a su juicio, *“desconoce el derecho de igualdad”* de quienes, como él, se encuentran en provisionalidad.

---

¹ Mediante Resolución N° 01566 del 3 de marzo de 2025.

Frente a las omisiones aludidas, en orden a salvaguardar sus prerrogativas fundamentales, pretende se ordene a la demandada suministrar, inmediatamente, contestación de fondo a su postulación radicada el 3 de marzo, así como excluir del concurso de méritos FGN 2024 el IDplanta 26866 – Nivel Central Profesional Especializado II.

Como soporte de lo aseverado, aportó, entre otros, resolución de nombramiento N° 01169 del 29 de julio de 2021, registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad de su hijo, declaración extrajuicio que acredita su calidad como padre cabeza de familia, y copia de las resoluciones N° 01566 y N° 02094 del 3 y 20 de marzo, respectivamente.

2. Mediante auto de la misma fecha de reparto, este despacho admitió la acción de tutela y corrió traslado a la accionada para garantizar sus derechos de defensa y contradicción.

3. El Subdirector de Talento Humano (E) de la **Fiscalía General de la Nación** alegó, en primer orden, la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales, así como la improcedencia de la tutela, atendiendo a que el accionante no estuvo en capacidad de demostrar *“que la inclusión de su cargo en la Resolución N° 01566 del 3 de marzo de 2025 le genere un daño inminente, grave y urgente”*, máxime cuando su vinculación en provisionalidad se encuentra vigente, sin que la oferta del mismo en un concurso de méritos sea causa fehaciente para retirarlo del servicio inmediatamente, *“pues así como todos los ciudadanos puede participar de la oferta pública a fin de acceder al empleo en periodo de prueba y posteriormente quedar inscrito en carrera”*.

Enfatiza en la obligación que recae sobre la entidad de proveer, a través de la generación de concursos de méritos, a los cuales puede acceder el actor en tanto cumpla lo requisitos, *“todos los empleos que se encuentren en vacancia definitiva o con nombramiento provisional o encargo”*, siendo esta la vía idónea para, precisamente, garantizar el derecho al trabajo *“en condiciones dignas y justas”*, mediante un empleo en carrera judicial.

Adicionalmente, informó que Rodríguez Cristancho omitió acogerse a las medidas afirmativas dispuestas por la entidad en la Circular N° 30 del 3 de septiembre de 2024, en la que fue concedida la oportunidad —con ampliación de plazos y criterios incluida— para presentar toda la documentación necesaria a efectos de acreditar la condición de sujeto de especial protección constitucional que hoy pregona en soporte de sus pretensiones.

En suma, dado que el accionante continúa prestando sus servicios en la entidad, gracias a un nombramiento en provisionalidad, y que la acción constitucional se fundamenta en supuestos o expectativas del

demandante derivadas “del temor de que... no se presente o no supere el Concurso de Méritos FGN 2024”, sin que, como fuera anticipado, ningún perjuicio irremediable se materializara, solicitó declarar improcedente la tutela así como la carencia actual de objeto por hecho superado, pues el 26 de marzo pasado, bajo radicado de salida N° 20253000016381, suministró contestación de fondo a la postulación del 5 de marzo previo.

4. El Subdirector Nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la entidad condicionó su intervención a citar, *in extenso*, las disposiciones de las circulares N° 030 del 3 de septiembre de 2024, N° 032 del 25 de septiembre de 2024, N° 0043 del 25 de noviembre de 2024 y N° 0046 de diciembre de 2024, por medio de las cuales se suministró y amplió información sobre la posibilidad de excluir del sorteo a los servidores que ostenten un cargo en provisionalidad pero adicionalmente se encuentran en circunstancias de especial protección constitucional.

Enfatizó en el contenido de la Circular N° 0046 de diciembre de 2024 y en las distintas precisiones que frente a las acciones afirmativas de madre o padre cabeza de familia se realizaron, respecto a lo cual sintetizó, concretamente, que:

La Fiscalía General de la Nación mediante Circular N° 030 del 3 de septiembre de 2024, implementó unas medidas afirmativas, que si bien no son obligatorias frente a los concursos de méritos, buscaban generar una acción afirmativa para aquellos servidores que se encuentren en una situación susceptible de especial protección dentro del proceso de provisión de empleos de la Fiscalía General de la Nación.

(...)

Finalmente es preciso aclarar, que las solicitudes recibidas con posterioridad al 27 de diciembre de los corrientes, no serán tenidas en cuenta por extemporáneas y que la Fiscalía General de la Nación, se reserva el derecho de verificación sobre la veracidad y autenticidad de los documentos aportados.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo procesal directo, preferente y sumario, que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos fundamentales, ante la amenaza o violación derivada de acción u omisión imputables a la autoridad, o a un particular en los casos señalados por la ley, salvo que el afectado disponga de otro de defensa judicial eficaz e idóneo para su protección, pues de carecer de esas cualidades puede promoverse como mecanismo transitorio, si con ello se busca precaver un perjuicio irremediable.

2. Previo a abordar el caso en concreto, es necesario constatar el enfoque legal y jurisprudencial de las garantías fundamentales invocadas.

Según la Constitución Política, el trabajo es un fin del ordenamiento interno establecido en el preámbulo de la aludida norma jurídica e instituyéndose en la misma como una garantía fundamental y un deber social. En particular, reconoce que conforme al artículo 25 superior “*toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas*” y que cualquier regulación legal o contractual respecto de aquella actividad deberá estar sujeta “*a la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores*” conforme al apartado 53.

Por su parte, en sentencia T-074 de 2023, la Corte Constitucional estableció:

Se trata de un derecho que no solo debe ser garantizado por las autoridades públicas (...), sino que también debe ser respetado por todos los particulares que se encuentren inmersos en cualquier tipo de relación laboral, pues estos también están sujetos a la Constitución y obligados a realizar sus principios. Sumado a lo anterior, ha afirmado que el disfrute del derecho al trabajo no se agota en el acceso y la permanencia de una vinculación laboral, sino que es indispensable que su ejercicio se realice en condiciones dignas y justas.

Siguiendo esa línea jurisprudencial, pero ahora con referencia a la igualdad como prerrogativa fundamental, la misma Corporación de manera uniforme, en sentencia C-038 de 2021, la definió así:

En criterio de la jurisprudencia constitucional, el vínculo del derecho a la igualdad con la dignidad humana se expresa en dos dimensiones: una formal y otra sustancial. Mientras la primera busca asegurar “la igualdad ante la ley y el deber de no discriminar (abstención), es decir, la prohibición de realizar tratamientos o de establecer ventajas injustificadas sobre un grupo de la población”, la segunda “exige al Estado promover las condiciones necesarias para alcanzar una igualdad real y efectiva de aquellos grupos tradicionalmente marginados y discriminados”. De esta forma, los poderes públicos deben adoptar medidas que disminuyan o eliminen injusticias y a las cuales se les reconoce “un designio compensatorio o reparador de previas desigualdades reales” que afectan profundamente el derecho a la dignidad humana.

(...)

(...) teniendo en cuenta que el concepto de igualdad es relacional, esto es, exige un ejercicio de cotejo entre grupos de personas, requiere, además, un criterio o tertium comparationis con fundamento en el cual resulta factible valorar “las semejanzas relevantes y las diferencias irrelevantes”. Lo anterior, toda vez que, consideradas en abstracto, todas las personas somos iguales, aun cuando en concreto nos perfilamos como individuos distintos y singulares. De ahí que el trato diferenciado esté permitido, siempre y cuando obedezca a criterios de objetividad y

razonabilidad, vale decir de ninguna manera el trato diferenciado puede estar fincado en motivos meramente subjetivos o prohibidos por la Constitución como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica –se destaca–.

Por cuanto se aduce igualmente conculcada, deviene pertinente recordar que, de acuerdo con la Ley 1755 de 2015, la prerrogativa fundamental de petición garantiza a todas las personas la facultad de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional² ha enunciado los siguientes, como sus elementos esenciales:

*(...) i) pronta resolución; ii) respuesta de fondo; y iii) notificación. Estos aspectos fueron abordados así: Prontitud: la respuesta debe efectuarse en el menor tiempo posible sin exceder los términos legales. **Respuesta de fondo:** la contestación de debe ser clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; **precisa**, de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, evitando pronunciamientos evasivos o elusivos; **congruente**, que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que atienda la cuestión en su totalidad. **Notificación:** no basta con solo emitir la respuesta, en la medida que debe ser puesta en conocimiento del interesado... debe resaltarse que la respuesta es inescindible al derecho de petición, no necesariamente tiene que ser favorable a lo solicitado, pues este elemento se satisface con la emisión de un pronunciamiento de fondo, conforme las características recién mencionadas. (Negritas fuera del texto).*

En lo atinente a la oportunidad, el artículo 14 de la misma normativa prevé que, salvo norma especial, las peticiones deberán "(...) resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción".

3. Por consiguiente, el problema jurídico que le corresponde analizar al despacho es, de un lado, si la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación incurrió en transgresión de derechos fundamentales, con incidencia particular en las garantías al trabajo e igualdad del accionante, al incluir el empleo en el cual se desempeña, desde el 29 de julio de 2021 en provisionalidad, en la oferta de cargos a los cuales puede aspirarse para proveer en carrera, mediante el Concurso de Méritos FGN 2024, convocado por el Acuerdo N° 001 de 2025³; por otra parte, si respecto a la prerrogativa fundamental de petición hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, como reclama la accionada.

---

² CC, T-044 de 2019

³ Por el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para proveer algunas vacantes definitivas en las modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera.

Frente al primer cometido, será preciso abordar (i) los supuestos generales de procedencia de la acción de tutela y (ii) la garantía de la estabilidad laboral reforzada de los padres cabeza de familia a fin de constatar, para el caso concreto, las medidas afirmativas desplegadas por la demandada en orden a salvaguardar la misma; así como (iii) analizar la viabilidad de cuestionar, por vía constitucional, los actos de la administración.

4. Pues bien, en lo relativo a los requisitos mínimos para la procedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha señalado:

*(...) el juez constitucional está llamado a verificar, en todos los casos, el cumplimiento de los siguientes presupuestos, a saber: (i) la legitimación en la causa por activa, que encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política a través del cual se define a la tutela como un mecanismo preferente y sumario al que puede acudir toda persona con el fin de reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales; (ii) la legitimación por pasiva, según la cual, las entidades (públicas o privadas) contra las cuales se interpone la acción deben gozar de cierta aptitud para responder por la presunta transgresión, (iii) la inmediatez, que impone el deber al accionante de impedir el paso excesivo del tiempo, de manera irrazonable o injustificada, "(...) entre la actuación u omisión que dio lugar a la vulneración o amenaza y el uso de la acción de amparo constitucional"; y, por último, **(iv) la subsidiariedad, que imposibilita, en principio, la procedencia de la acción de tutela cuando, quien acude a ella, dispone de otro medio de defensa judicial para elevar sus pretensiones.***

No obstante, respecto al último requisito, puede ocurrir que, aun existiendo materialmente otros mecanismos judiciales, la acción de tutela proceda cuando aquellos adolezcan de idoneidad y/o eficacia para resolver el caso, o, cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable.

Frente al primer supuesto, ha establecido la jurisprudencia constitucional que un mecanismo es idóneo cuando resulta apto para proteger los derechos fundamentales alegados, y es efectivo cuando tiene la facultad de brindar oportunamente la protección del derecho. En estos eventos, para que el juez constitucional pueda referirse al grado de idoneidad y/o eficacia de un mecanismo judicial, debe analizar las condiciones particulares del accionante, pues, la valoración habrá de flexibilizarse cuando se esté en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o de una persona cuya debilidad manifiesta sea de un nivel importante. Así, si logra determinarse que un medio judicial no goza de las calidades referidas, la acción de tutela procederá de manera definitiva en procura de superar la conculcación⁴. (Negritillas fuera del texto).

---

⁴ CC, T-271 de 2018.

Se reitera, entonces, que la jurisprudencia constitucional⁵ se ha encargado de destacar el carácter subsidiario de la acción de tutela, como mecanismo judicial para la protección inmediata de derechos fundamentales. De esto se sigue que el juez tiene una competencia solo accesoria y residual, que le impide sustituir al especializado, a riesgo de desnaturalizar el objeto del instrumento constitucional y convertirlo en un mero recurso expedito para debatir toda clase de controversias legales

Precisamente, la subsidiariedad de la tutela únicamente se viabiliza cuando: “(i) no exista otro medio de defensa judicial que permita resolver el conflicto relacionado con la afectación de un derecho fundamental; (ii) el mecanismo existente no resulte eficaz e idóneo; o, (iii) la intervención transitoria del juez constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable”⁶.

En la sentencia T-032 de 2011 la Corte precisó:

Así, a la luz del principio de subsidiariedad, la acción de tutela no puede ser ejercida como un medio de defensa judicial alternativo o supletorio de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para el amparo de los derechos. De hecho, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, a través de la acción de amparo no es admisible la pretensión orientada a revivir términos concluidos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad injustificada del actor. Igualmente, la jurisprudencia tampoco ha consentido el ejercicio de la acción de tutela como el último recurso de defensa judicial o como una instancia adicional para proteger los derechos presuntamente vulnerados.

Acerca de la procedencia de la tutela para salvaguardar la estabilidad laboral reforzada de una persona en condiciones de debilidad manifiesta, en sentencia T-020 de 2021, la misma Corporación puntualizó:

*Según el artículo 53 de la Constitución, **todos los trabajadores son titulares de un derecho general a la estabilidad en el empleo. Aquella garantía se intensifica en el caso de sujetos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, a saber: (i) las mujeres embarazadas; (ii) las personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud; (iii) los aforados sindicales; y (iv) las madres y padres cabeza de familia.***

De igual forma, este postulado se deriva de otras disposiciones superiores, como el derecho de todas las personas “en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (arts. 13 y 93). También, la mencionada garantía se sustenta en

---

⁵ CC, T-034 de 2021, T-647 de 2015, T-7131 de 2014, T-781 de 2013, entre muchas otras.

⁶ CC, T-165 de 2020.

los deberes que le asisten al Estado, como proteger el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” (art. 25), y adelantar una política de “integración social” a favor de los “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47). Finalmente, los artículos 1º, 48 y 95 aluden al deber de “obrar conforme al principio de solidaridad social”.

(...)

En tal perspectiva, si un empleador pretende desvincular a una persona que se halla en esta situación, debe contar con autorización del Inspector de Trabajo. Este funcionario verifica que las razones esgrimidas no estén asociadas a la condición de salud del trabajador, sino que se trata una causal objetiva. Bajo este entendido, la estabilidad laboral reforzada se concreta en una prohibición de despido discriminatorio hacia quienes se encuentran amparados por dicha prerrogativa. De manera que la pretermisión del trámite ante la autoridad laboral “acarrea la presunción de despido injusto”. Por consiguiente, se invierte la carga de la prueba y corresponde al empleador acreditar una causa objetiva para terminar el contrato de trabajo.

(...)

A partir de las reglas enunciadas, esta Corporación ha establecido los presupuestos para que opere la garantía de estabilidad laboral reforzada. En concreto, el juez constitucional debe verificar: (i) que la condición de salud del trabajador le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus funciones; (ii) que dicha circunstancia sea conocida por el empleador con anterioridad al despido; y, (iii) que no exista una causal objetiva que fundamente la desvinculación. (Negrillas fuera del texto).

Respecto a la calidad de padre o madre cabeza de familia, ésta se encuentra claramente definida en la ley y ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional en el siguiente sentido⁷:

Para la Corte, la condición de padre o madre cabeza de familia se acredita cuando la persona (i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o personas incapacitadas para trabajar, (ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia y (iii) su pareja murió, está ausente de manera permanente o abandonó el hogar y se demuestra que esta se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental.

5. A partir del sustrato legal y jurisprudencial hasta aquí citado, debe anticipar el despacho que ni los hechos de la demanda ni la información allegada conducen a sustentar, con el propósito aspirado por John Alexander Rodríguez, la conculcación de sus derechos fundamentales al trabajo e igualdad, en cuanto se acredite algún trato discriminatorio o sin consideración a una perspectiva diferenciadora, por parte de la accionada en la decisión de incluir el IDplanta 26866 en la oferta del Concurso de Méritos FGN 2024, que, ajena a las condiciones personales de quien aduce encontrarse en

---

⁷ CC, T-003 de 2018.

condición de debilidad manifiesta por ser padre cabeza de familia, ponga en riesgo, a la vez, su estabilidad laboral.

Conforme logra extraerse de la contestación a la demanda, se evidenció que, consciente de la situación de quienes, como el accionante, se encontraban en un posible escenario de debilidad manifiesta, la Directora Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación emitió, dentro de la planeación del Concurso de Méritos FGN 2024, la Circular N° 030 del 3 de septiembre de 2024, mediante la cual aclaró y amplió los criterios de priorización para la aplicación de medidas afirmativas en favor de sujetos con protección constitucional reforzada que, según informó, estaban dirigidas *"a excluir a servidores en provisionalidad que se encontraran en condiciones específicas, tales como ser pre pensionados, madres o padres cabeza de familia, personas con enfermedades huérfanas, catastróficas o ruinosas, y personas con discapacidad"*, así:

2. *Madre o padre cabeza de familia: Cuyo ingreso familiar sea exclusivamente el devengado por concepto del salario recibido por el empleo desempeñado en la entidad.*

Entiéndase como madres o padres cabeza de familia (soltero o casado) quien ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.

La circunstancia anteriormente referenciada deberá acreditarse de la siguiente manera:

✓ Declaración notarial suscrita bajo la gravedad de juramento en la cual la persona manifiesta encontrarse en condición de padre o madre cabeza de familia, es decir, que no tiene alternativa económica ni ayuda de los demás miembros de la familia.

✓ Registro civil que acredite el parentesco del hijo menor.

✓ Si su pareja ha fallecido el acta de defunción.

✓ Si cuenta con hijos mayores o menores con discapacidad, deberá aportar el certificado de discapacidad expedida por la EPS correspondiente.

Informó la entidad que, posteriormente, esos plazos y criterios para acreditar y aplicar a las medidas fueron ampliados mediante las Circulares N° 032 y N° 046 de 2024, de las cuales allegó copia, extendiendo la oportunidad hasta el 27 de diciembre de 2024, lo que, en definitiva, permitió un total de tres meses *"para que los servidores, sin excepción alguna, presentaran la documentación necesaria y pudieran acogerse a uno de los cuatro criterios establecidos"*.

Ahora bien, por esa misma línea, sostuvo el Subdirector de Talento Humano que a través de la Circular N° 0043 del 25 de noviembre de 2024, se incorporaron algunas modificaciones para la selección de los empleos objeto de concurso, así:

(...) 5) Los empleos provistos bajo nombramiento en provisionalidad, los cuales serán seleccionados de manera aleatoria y automática a través de un sistema de sorteo abierto, cuya cantidad por denominación residual y resulta de aplicar en orden de prelación los criterios antes mencionados. **Se excluyen de este criterio, aquellos empleos que fueron cobijados con las acciones afirmativas establecidas de forma voluntaria por la entidad en la circular N° 030 de 2025 modificada por la circular N° 032 de 2024 y que fueron aceptadas por la Administración.** (Negritas fuera del texto).

Aun cuando las circulares en mención fueron comunicadas a todos los funcionarios de la entidad a través de correos masivos, siendo posible “validar los casos de aproximadamente 24.000 servidores”, no obra registro de que, distinta a su postulación radicada el pasado 5 de marzo por la que solicitó excluir el IDplanta 26866 de la oferta concursal —solicitud claramente extemporánea para ese propósito—, Rodríguez Cristancho haya remitido la información necesaria en el momento correspondiente, luego desplegado acción alguna para acogerse a las acciones positivas indicadas; por el contrario, lo que evidencia el despacho es un irrefutable descuido de su parte en acoger las disposiciones de las circulares que determinaron, concediendo plazos considerables, la forma de registro y cargue de documentos específicos mediante los cuales podía acreditar sus condiciones de especial protección.

Ese escenario de inacción obviamente no implica para la entidad obligación alguna de modificar, en sus tiempos y etapas, la estructura del concurso público, ni la imposición, facilitada por el juez de tutela, de permitirle subsanar la situación a riesgo de, incluso, entorpecer el normal desarrollo del concurso de méritos con fundamento en lo que apenas son consideraciones subjetivas sobre la provisión, o no, del empleo.

Precisamente, como quiera que esta acción constitucional versa sobre hechos cuyo predicado de transgresión *iusfundamental* no es claro que llegue siquiera a materializarse, deviene oportuno recordar que la Corte Constitucional⁸ ya ha establecido para las entidades públicas las siguientes obligaciones, frente a sus empleados aforados y nombrados bajo la modalidad de provisionalidad:

(i) motivar debidamente el acto de desvinculación; (ii) establecer los mecanismos necesarios para garantizar que dicho grupo de personas sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos; y, (iii) **mantener su**

---

⁸ CC, SU-446 de 2011, reiterada en la T-186 de 2013.

permanencia en el empleo, siempre que los criterios de razonabilidad y proporcionalidad lo permitan, es decir, cuando se cuenten con vacantes para reubicarlos. (Negrillas fuera del texto).

Con todo, el despacho no pasa por alto que las resoluciones N° 01566 y N° 02094 del 3 y 20 de marzo de 2025, respectivamente, son actos administrativos de naturaleza particular. En ese sentido, retomando el presupuesto de subsidiariedad, es incuestionable que el demandante cuenta, desde ahora, (i) con la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a lo regulado en el artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, e interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las disposiciones que, hoy aduce, ponen en riesgo su estabilidad laboral al incluir el cargo de su interés en la oferta concursal, pero, específicamente, (ii) con la facultad de solicitar, por vía de medidas cautelares decretadas a su favor, la suspensión de efectos.

Sobre el tópico abordado, la Corte Constitucional estableció las excepciones a la regla general de la aludida improcedencia contra actuaciones de carácter abstracto y general por parte de la administración, habilitando el instrumento cuando:

(i) la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para cuestionar esa clase de decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza constitucional; y cuando (ii) la aplicación del acto administrativo general amenace o vulnere los derechos fundamentales de una persona. Además, ha precisado que la acción de tutela es procedente contra las determinaciones de orden general en el evento que éstas causen daños a los derechos fundamentales de las personas y que devengan en perjuicios irremediables⁹.

Aunado lo anterior, la jurisprudencia de la misma Corporación constitucional, respecto a la eficacia del aludido medio de control, estableció que:

(...) las medidas cautelares en el CPACA son un mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz, de aquellos derechos que se buscan restablecer a través de las acciones contencioso-administrativas, pero que pueden verse expuestos a la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, le corresponde al accionante, en atención a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela (art.86 CP), demostrar que agotó este medio de protección o que el juez administrativo haya negado el decreto de la medida cautelar, sin advertir que se configuran los elementos que demuestran la existencia de perjuicio irremediable¹⁰ (Negrilla fuera de texto).

---

⁹ CC, C-132 de 2018.

¹⁰ CC, T-733 de 2014.

Luego, en sentencia T-149 de 2023, reiteró:

Esta corporación ha establecido que la acción de tutela opera como un mecanismo de protección constitucional subsidiario, cuando el instrumento principal no es idóneo o eficaz para la protección de un derecho fundamental, o cuando es empleada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. La subsidiaridad implica que el accionante agote previamente los medios de defensa legalmente disponibles para proteger los derechos, pues la tutela no puede desplazar los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, ni tampoco servir de herramienta procesal extraordinaria y adicional de los diferentes procesos judiciales.

Así, esta corporación ha reiterado que el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor pretende controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA– consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (iii) la presunción de legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios.

Atendiendo, entonces, a ese presupuesto de subsidiariedad y a la carencia de comprobación de perjuicio irremediable, debe concluirse la improcedencia de la acción de tutela, no solo para resolver de manera definitiva o transitoria acerca del derecho que Rodríguez Cristancho reclama para continuar desempeñando su cargo indefinidamente en el tiempo, bajo provisionalidad, sin aspirar a ocuparlo en propiedad, sino, en mayor medida, para impedir a la entidad, por conducto de un mandato de tutela, ofertar el empleo mediante concurso de méritos; situación esta última que riñe, además, con el desconocimiento de la normatividad legal¹¹ y constitucional¹² que ordena proveer, vía concursal, los empleos públicos, asegurando la igualdad de oportunidades.

Como se anticipó, un debate de esa índole, mediante el cual, en manera alguna se acredita una manifiesta violación de sus garantías fundamentales, por arbitrario proceder de la entidad pública, es impertinente a través del mecanismo de la tutela, cuando el objetivo

---

¹¹ El Decreto Ley 20 de 2014, como bien lo precisó la accionada, regula la carrera especial de la Fiscalía y establece que los empleos ocupados en provisionalidad deben ser ofertados para garantizar el principio de mérito y capacidad.

¹² Artículos 125 y 209 de la Constitución Política.

claro es garantizar su permanencia en la entidad, bajo provisionalidad, mediada por el supuesto de transgresión jurídica de las resoluciones N° 01566 y N° 02094 —cuya presunción de legalidad y acierto subsisten, mientras no se invalide por la autoridad competente que no es el juez de tutela, salvo las excepciones a las cuales se hace alusión antes— que dispusieron la inclusión del empleo que ocupa en la oferta de vacantes a proveer en el concurso de méritos actualmente adelantado por la entidad.

No es dable, en consecuencia, so pena de desnaturalizar el carácter excepcional del mecanismo tutelar, la modificación o invalidación de los enunciados actos administrativos, cuyos efectos a nivel nacional ya se produjeron.

Lo anterior porque, es obvio, también, que ninguno de los presupuestos de subsidiariedad se satisface en el asunto como para terciar a favor del accionante, involucrándose el juez constitucional en el examen de aquella actuación de la administración, en principio legitimada por la exigencia de la provisión de los cargos en la carrera judicial, para hacer prevalecer su situación frente al mérito de otros.

Adicionalmente, llama la atención una situación particular, y es que, si bien el demandante pudo haber acreditado su calidad de padre cabeza de familia, pues de ello dan cuenta los elementos probatorios allegados con la tutela —que para el despacho son válidos y no revisten ninguna duda—, lo cierto es que no por eso está el juez constitucional facultado para emitir órdenes con el alcance pretendido, perjudicando, en contraposición a la salvaguarda de sus derechos fundamentales, las mismas garantías de quienes sí se han inscrito o están por inscribirse al concurso de méritos con el propósito de aspirar al empleo IDplanta 26866 – Nivel Central Profesional Especializado II, y desconociendo, por virtud del mérito, o desplegaron las acciones afirmativas que oportunamente publicó la entidad convocada.

Así las cosas, en el presente asunto no solo aflora patente que el actor cuenta, desde el 29 de julio de 2021, con vinculación vigente en provisionalidad al interior de la entidad, sino que, a fin de garantizar su permanencia, ciertamente está en posibilidad de inscribirse al concurso de méritos y asegurar, en igualdad de condiciones a quienes ejercen su derecho al trabajo, a la igualdad e, incluso, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, el empleo de su interés.

En esa forma, encuentra el despacho que la demanda no supera el requisito de subsidiariedad, atendiendo, a la vez, a los criterios cuya acreditación es necesaria para la procedencia de la acción de tutela: *“(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en*

situaciones degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y, (v) la existencia de otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá si la protección tutelar procede".¹³ (Negrillas fuera del texto).

Con sustento en todo lo anterior, la acción de tutela se declarará improcedente.

6. Por último, en lo atinente a la prerrogativa fundamental de petición del accionante, para el despacho se encuentra acreditado que, en ejercicio de la misma, John Alexander Rodríguez Cristancho solicitó, el 5 de marzo pasado bajo consecutivo N° 20256110045882, excluir "el IDplanta 26866 – Nivel Central de los empleos a proveer con ocasión al Concurso de Méritos FGN 2024".

Al respecto, por medio de oficio identificado con radicado de salida N° 20253000016381 del 26 de marzo siguiente, la Subdirección de Talento Humano de la entidad le indicó:

En atención a su comunicación... mediante la cual solicita para que se tenga en cuenta su condición de padre cabeza de familia, ... le informo, mediante la Circular N° 030 de 2024, emitida el 3 de septiembre de 2024, que la Dirección Ejecutiva aclaró y amplió los criterios para la aplicación de medidas afirmativas. Estas medidas estaban dirigidas a excluir a servidores en provisionalidad que se encontraran en condiciones específicas, tales como ser pre pensionados, madres o padres cabeza de familia, personas con enfermedades huérfanas, catastróficas o ruinosas, y personas con discapacidad. Posteriormente, los plazos y medidas fueron ampliados mediante las Circulares N° 032 y N° 046 de 2024, extendiendo el plazo hasta el 27 de diciembre de 2024, para lo cual debieron acreditar ante la Subdirección de Talento Humano al correo electrónico acreditacionconcursomeritos2024@fiscalia.gov.co, con los soportes respectivos a efectos de estudiar cada uno de los casos y determinar si procedía el amparo solicitado, situación que en su caso en la fecha es extemporánea.

Así las cosas, se informa que Usted debió remitir dentro del término otorgado su solicitud junto con los anexos que consideró pertinentes al correo electrónico acreditacionconcursomeritos2024@fiscalia.gov.co, único canal definido para tramitar estas solicitudes en los términos y condiciones establecidas en las circulares mencionadas. (Negrillas y subrayado parte del texto).

En lo relativo a la respuesta de fondo como componente básico del derecho fundamental de petición, debe recordarse que la Corte Constitucional señaló en sentencia T-230 de 2020:

(...) la respuesta de la autoridad debe ser: "(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera

---

¹³ CC, T-355 de 2018.

que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”¹⁴. **La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por el interesado**, salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la información pública (art. 74 C.P.), dado que, por regla general, existe el “deber constitucional de las autoridades públicas de entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado”. (Negrillas fuera del texto).

Es posible concluir, en ese orden, que el trámite adelantado por la entidad demandada, en congruencia con el cual dio respuesta al accionante el 26 de marzo, a pesar de no alcanzar el beneficio procurado, abarcó integralmente la reclamación planteada en la solicitud y motivó con suficiencia la imposibilidad de excluir, en la fecha actual, sin la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Circular N° 030 del 3 de septiembre de 2024, el IDplanta 26866 de los empleos a proveer mediante el Concurso de Méritos FGN 2024, encontrándose descartada, por consiguiente, la vulneración a su prerrogativa fundamental de petición, no en estricta aplicación del hecho superado, sino por cuanto la solicitud fue absuelta de manera congruente, integral y de fondo dentro del término legalmente establecido.

Esa comunicación, según se extracta, fue notificada adecuadamente, teniendo en cuenta que al día siguiente de la suscripción se envió a las direcciones electrónicas *cristancho230@hotmail.com* y *jalexander.rodriguez@fiscalia.gov.co*, coincidente, la primera de ellas, con la registrada por Rodríguez Cristancho en sus escritos petitorio y tutelar.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 se notificará el fallo por el medio más expedito. En caso de no impugnarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, inmediatamente se remitirá la actuación a la Corte Constitucional para el trámite de la eventual revisión.

---

¹⁴ Cita de la Corte: “Sentencia T-610 de 2008. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019”.

Radicación de primera instancia: 11001310904920250004800

Accionante: John Alexander Rodríguez Cristancho

Accionado: Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, D.C.**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por **John Alexander Rodríguez Cristancho**, contra la **Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación**.

Segundo. Notificar, por el medio más expedito, la presente providencia. De no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes, remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

HELENA MATEUS MORALES
Juez

Firmado Por:

Blanca Helena Mateus Morales
Juez
Juzgado De Circuito
Penal 049 Función De Conocimiento
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **919ef90227608c352433c827b6fd2223b8aa25b648d7edd61daf2c124f42e660**
Documento generado en 09/04/2025 07:45:06 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>